

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. num. extraordinario núm. 13, de 7/5/99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE num. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a contar desde el día siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado n.º 1 de lo Contencioso Administrativo de Melilla, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produjo la desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.  
Melilla, 1 de Marzo de 2002.  
La Secretaria Técnica.  
Inmaculada Merchán Mesa.

**CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
Y POLÍTICA TERRITORIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA  
Y URBANISMO**

**608.-** Habiéndose intentado notificar el expediente de ruina inminente a D. Juan Serrano Riscos propietario del inmueble sito en la calle Plaza D.ª Adriana n.º 3/San Antón, con resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma, por decreto de fecha 23-01-2002, registrado al núm. 155 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

Visto informe de la Dirección General de Arquitectura-Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Política Territorial de fecha 15-01-2002 infor-

mando del estado de ruina inminente en que se encuentra el inmueble situado en C/. D.ª Adriana, 3/ San Antón/Hornos, cuya propiedad es de D. Juan Serrano Riscos; D. Juan Ferre Fernández y D. José Ferre Hernández, que:

"Habiéndose girado visita de inspección al inmueble sito en Plaza de D.ª Adriana n.º 3/ San Antón/Hornos, se ha podido comprobar el peligro que presenta dicho inmueble para la vecindad, a pesar de haberse adoptado las medidas pertinentes de seguridad, tales como clausura de hueco en cerramiento de ladrillo, encaminada a impedir el acceso al interior, para seguridad de personas (especialmente niños).

Se ha conocido que en el cerramiento de ladrillo alrededor de la estructura metálica de sujeción de la fachada lateral de un edificio sito en la Plaza de D.ª , y de conformidad con el art. 183.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, R.D. 1346/76 y en concordancia con el art. 26 y ss. del Reglamento de Disciplina Urbanística, R.D. 2187/1978, de 23 de junio, VENGO EN DISPONER:

Primero.- Se inicie de oficio expediente de ruina inminente del inmueble sito en C/. D.ª Adriana, 3/ San Antón/Hornos.

Segundo.- Se comunique a los interesados en este procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 42.2. de la LRJPAC.

\* El plazo máximo establecido para la resolución del presente expediente es de TRES MESES, desde la fecha del Decreto de iniciación.

\* Efectos que producirá el silencio administrativo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la LRJPAC (en su nueva redacción según Ley 4/1999), en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado o notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

a) En el caso de procedimiento de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones Jurídicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadora o, en general, de intervención, susceptibles de producir efec-